

PLENARIA CÁMARA DE REPRESENTANTES

PROYECTO DE LEY NO. 369 DE 2021C/ 341 DE 2021S
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y OTRAS
DISPOSICIONES”

PROPOSICIÓN SUPRESIVA

1. ELIMÍNESE el ARTÍCULO 68, del proyecto de Ley:

Artículo 68°. Adiciónese el artículo 221A a la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:

ARTICULO 221A: INJURIA Y CALUMNIA CONTRA FUNCIONARIOS O EXFUNCIONARIOS PÚBLICOS: El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal.

Cuando quien profiera injuria o calumnia en contra de un funcionario o exfuncionario público o sobre su familia, sea representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria a la que pertenece, en los mismos términos del artículo 91 de la Ley 906 de 2004.

Justificación: El Tipo penal no satisface los juicios de necesidad, proporcionalidad, ni ultima ratio, además de que resulta inconveniente en razón a las siguientes consideraciones:

1) El tipo penal no tiene claridad frente al bien jurídico tutelado que protege, ya que al ser ubicado en el Título V no comparte Unidad de Materia con el proyecto en cuestión, ya que dicho título protege el bien jurídico de la integridad moral de la ciudadanía en general, no la recta y eficaz impartición de justicia o la administración pública.

Los delitos que integran el Título V no distinguen si el sujeto pasivo es funcionario público o un ciudadano en general. Lo cual plantea que el tipo penal además de ir en contravía del principio de proporcionalidad rompe con el principio de igualdad, más aún cuando el delito de Injuria y Calumnia son conductas de naturaleza querellable y el nuevo tipo planteado no lo sería.

2) De acuerdo al artículo propuesto, el cual carece de técnica legislativa penal, existiría una violación al Non Bis In Idem, ya que habría lugar a una doble sanción. Toda vez que por el mismo hecho a una persona se le condenará en primera medida por Injuria o Calumnia y posteriormente se la condenaría por injuria y calumnia contra funcionarios o exfuncionarios públicos, lo cual resulta contrario a derecho, sin mencionar que

es una medida desproporcional que no supera el análisis de necesidad, pertinencia y ultima ratio.

3) Las conductas que este tipo penal busca sancionar ya se encuentran tipificadas en los delitos de:

- 1) Falsa denuncia. (C.P. Art 435).
- 2) Falsa denuncia contra persona determinada. (C.P. Art 436).
- 3) Injuria. (C.P. Art 220).
- 4) Calumnia. (C.P. Art 221).
- 5) Violencia contra servidor público. (C.P. Art 429).

Ante lo cual el nuevo tipo penal propuesto resulta inocuo.

4) La pena planteada resulta desproporcional (de 5 a 10 años de prisión), teniendo en cuenta que solo se diferencia de la Injuria y la Calumnia frente a que el sujeto pasivo sea funcionario público, exfuncionario o familiar, además de que estos dos delitos tienen penas desde 1 año y 3 meses hasta 6 años de prisión.


Señalando además que el proyecto adolece de conocer la diferencia entre las categorías de funcionario público y servidor público.

5) La medida planteada en el inciso segundo por técnica legislativa penal no debe ubicarse en dicho tipo penal, sino en la Ley 906 del 2004, Código de Procedimiento Penal.

Aunado a que la medida viola el principio de proporcionalidad, estigmatiza y persigue la función periodística, la libertad de prensa en detrimento de la transparencia y el control ciudadano a la cual se deben los servidores públicos, entre ellos los funcionarios públicos.

Este tipo penal resulta intimidatorio de una manera nociva y desproporcionada ante lo cual resulta menester su eliminación. Casos como el escándalo de corrupción de centros poblados y la eventual salida del gobierno de la Exministra Karen Abudinen fueron llevados al ruedo público por el periodismo nacional, así como por el movimiento masivo ciudadano en redes sociales.

Cordialmente,



JUAN CARLOS LOZADA VARGAS
Representante a la Cámara
Partido Liberal